

# Tema 7. Derechos económicos de la mujer en el matrimonio y las relaciones de pareja

Módulo 3. Análisis sectorial y perspectiva de género  
en la Unión Europea

With the support of the ERASMUS+ programme of the European Union



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



**G-NET**

Equality training network  
EU contributions to gender  
mainstreaming and citizenship

*'The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein'*

- ©De la edición: *Equality Training Network: EU Contributions to gender mainstreaming and citizenship (G-NET)*, 2016
- ©De los textos y actividades: *Equality Training Network: EU Contributions to gender mainstreaming and citizenship (G-NET)*
- Elaboración:
- Adrià Calvet: Módulo 1, temas 1, 2 y 3.  
Martha Zapata: Módulo 2, temas 1 y 2; Módulo 3, temas 2, 3 4 y 8.  
Teresa Orozco Martínez: Módulo 2, tema 1; Módulo 3, tema 3.  
Rocío Ramírez Rodríguez: Módulo 2, temas 2 y 4; Módulo 3, tema 2.  
Anahí Napal Gutiérrez: Módulo 2, tema 3; Módulo 3, tema 2.  
Paloma Pontón: Módulo 2, tema 5; Módulo 3, tema 1.  
Núria Serret: Módulo 2, tema 5.  
Víctor Merino: Módulo 3, tema 5.  
Neus Oliveras: Módulo 3, tema 6.  
Ana Giménez y Cristina Villó: Módulo 3, tema 7.  
Alrik Schubotz: Módulo 3, tema 8.  
Sabrina G. Benedetto, María Julieta Cortés y Patricia Rojo: Módulo 4, tema 1.  
Ximena Araneda Fornachiari y Ana Rosa Ruiz Fernández: Módulo 4, tema 2.  
Mariela Zelada Ochoa, Maricruz Alvarez Mury y Jacqueline García de De León: Módulo 4, tema 3.  
Mónica Baeza Leiva, Scarlett Lagos Fuentes y Alberto Olivares: Módulo 4, tema 4.
- Coordinación: Inma Pastor
- Supervisión: Virginia Maquieira, Pilar Folguera, Laura Román, Ana Giménez, Víctor Merino, Teresa Torres y Neus Oliveras.



Esta obra está sujeta a una licencia de Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons: en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será necesario reconocer la autoría, no hacer uso comercial y difundir bajo la misma licencia CC que esta obra original.

La licencia completa puede consultarse en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.



## **Equality training network**

EU contributions to gender  
mainstreaming and citizenship

Es una red de universidades de América Latina y Europa que imparten cursos sobre Integración Europea y Género y diseñan contenidos educativos para ser impartidos en las instituciones de educación superior. La actividad de la red se dirige a estudiantes,

responsables técnicos/as y políticos/as y personal investigador. El proyecto añade valor al análisis de las relaciones entre América Latina y la UE como fuente de desarrollo económico y social, mediante la construcción de ciudadanía y sociedades inclusivas, y reflexiona sobre buenas prácticas de la UE que han llevado a cabo la incorporación efectiva de la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades entre los miembros de la Unión Europea.

Los contenidos educativos se concretan en los materiales didácticos ya testeados en las diferentes capacitaciones de las universidades de la red previstas en el proyecto y que mediante este medio se ponen a disposición pública bajo una licencia de Creative Commons para que puedan ser utilizados por aquellas personas o instituciones que lo consideren.

Los materiales se estructuran en diferentes módulos temáticos, cada uno de los cuales se divide en diversas unidades o temas de interés. Cada unidad dispone, al menos, de un marco teórico, una presentación y lecturas recomendadas.

Más información sobre la red G-NET y descarga de materiales en Internet (<http://www.gendertraining.eu>).

## Contenido

Índice de figuras.....	4
Índice de tablas.....	4
1. Introducción. Normativa europea en materia de matrimonio y relaciones de pareja.	
Principios inspiradores .....	6
2. Régimen económico aplicable al matrimonio y a las uniones de pareja .....	8
2.1. Régimen económico. Conceptos básicos.....	8
2.2. Régimen económico. Análisis de su regulación en algunas legislaciones nacionales europeas	
10	
2.2.1. Europa mediterránea. El caso español.....	10
2.2.2. Países Nórdicos. El caso de Dinamarca .....	12
2.2.3. Centro Europa. El caso de Austria.....	12
2.2.4. Europa del Este. El caso de Rumania.....	13
2.2.5. Inglaterra y Gales. Un supuesto de <i>common law</i> .....	14
3. Consecuencias en función del régimen económico aplicable.....	15
3.1. Consecuencias del régimen económico aplicable en algunas legislaciones nacionales europeas	
15	
3.1.1. Europa mediterránea. El caso español.....	15
3.1.2. Países Nórdicos. El caso de Dinamarca .....	17
3.1.3. Centro Europa. El caso de Austria.....	17
3.1.4. Europa del Este. El caso de Rumania.....	19
3.1.5. Inglaterra y Gales. Un supuesto de <i>common law</i> .....	20
4. Análisis de la situación de la mujer en función del régimen económico aplicable.....	21
5. Retos y limitaciones .....	28
6. Referencias bibliográficas.....	30
7. Recursos y materiales.....	31

## Índice de figuras

Figura 1. Dedicación del tiempo de la mujer al cuidado de los hijos y del hogar (%) .....	23
Figura 2. Índice de igualdad en función del tiempo de dedicación de la mujer al cuidado de los hijos y del hogar (%) .....	23

## Índice de tablas

Tabla 1. Ejemplo de distribución de los beneficios obtenidos por trabajo fuera del hogar en los regímenes de comunidad de bienes .....	25
--	----

# Derechos económicos de la mujer en el matrimonio y las relaciones de pareja

## Objetivos de aprendizaje

---

1. *Reconocer la necesidad de que el principio de igualdad se vea reflejado en el ámbito de las relaciones familiares*
  2. *Diferenciar los tipos de regímenes económicos aplicables al matrimonio y a las parejas de hecho, registradas o no, para conocer en qué situación se encuentra la mujer en cada uno de ellos*
  3. *Señalar los efectos que se derivan para la mujer tras la disolución del matrimonio o la convivencia, en función de cuál es el régimen económico aplicable y la causa de la ruptura*
  4. *Determinar cómo se ejerce la responsabilidad parental tras la ruptura, tanto en el caso de parejas casadas como no casadas*
  5. *Identificar las desigualdades económicas que se producen en la práctica entre el hombre y la mujer, a pesar de la igualdad jurídica formal.*
- 

## Resumen

---

*En este capítulo se analiza cuál es la situación económica de la mujer casada o que convive con su pareja, en función del régimen económico y de la atribución de la responsabilidad parental. Para ello, hemos considerado necesario exponer la regulación jurídica de la economía familiar en cinco países de la UE representativos de diferentes culturas y sistemas jurídicos (España, Dinamarca, Austria, Rumania e Inglaterra y Gales). Todo ello con el fin de poner de manifiesto cómo los diferentes regímenes económicos influyen de manera directa en la situación patrimonial de la mujer, tanto durante la convivencia como en el momento de la ruptura en vida o por fallecimiento de uno de ellos.*

---

## 1. Introducción. Normativa europea en materia de matrimonio y relaciones de pareja. Principios inspiradores

A finales de los años 70 la Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa comienzan a trabajar en la lucha por la igualdad formal y material del hombre y la mujer, dentro y fuera del matrimonio.

La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1979, en su art. 16 establece que «Los estados parte adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares. En particular, asegurarán, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (...) h) los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial».

En el mismo sentido, el art. 20 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (la cual tiene el mismo valor jurídico que el derecho primario de la Unión Europea, de acuerdo con el art. 6 del TUE) reconoce el principio de igualdad con carácter general al advertir que “todas las personas son iguales ante la ley” para, a continuación, señalar en el art. 21 que “1. se prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida por razón de sexo (...)”.

Cuando dos personas contraen matrimonio o conviven en pareja se genera entre ellas un entramado de relaciones de contenido personal y económico que, si bien se enmarcan dentro de la esfera privada, no deben ser ajenas al principio de igualdad.

Tradicionalmente, estas relaciones estaban presididas por un principio de jerarquía que caracterizaba la familia patriarcal, en las que el hombre ejercía la autoridad o potestad marital. Igualmente, él era quien juzgaba y sancionaba los hechos que ocurrían dentro del ámbito familiar y entre sus miembros. La familia era un ámbito privado, en el sentido de que en ella estaban ausentes los poderes u órganos públicos. Hoy se puede hablar de un ocaso de este tipo de concepción. Los miembros de la familia son ejecutores de funciones que la sociedad les confiere. Por lo tanto, lejos de ser soberanos están sometidos a los valores y a los controles de ésta (DIEZ PICAZO y GULLON, 2004).

En este sentido, la mujer hoy en el ámbito de las relaciones de familia goza, en principio, de iguales derechos y deberes que el hombre, tanto en la esfera personal como patrimonial, y no solo respecto de su cónyuge sino también respecto de sus hijos. De lo que se desprende una concepción de la familia más igualitaria.

Desde una perspectiva social y cultural, la familia es un instrumento de socialización del individuo, siendo una de sus más importantes funciones la de transmitir pautas de comportamiento. Por ello, es esencial que la familia se organice de acuerdo con unos valores igualitarios, al objeto de que éstos se transmitan entre generaciones (DIEZ PICAZO y GULLON, 2004).

La familia es reconocida como un elemento natural y fundamental de la sociedad y digno de especial protección por el Estado (ex art. 16 Declaración Universal de Derechos Humanos) a la que el ordenamiento jurídico dota de una reglamentación legal. Sin embargo, su regulación no tiene por qué coincidir plenamente con lo que socialmente se considera como familia. Lejos de ello, el derecho no regula todos los modelos de familia ni todos los aspectos de la relación familiar.

El modelo de familia más extendida es el que nace del vínculo matrimonial, entendiéndose como tal aquella relación jurídica que está formada por la expresión de la voluntad de los contrayentes de formar una comunidad de vida. Sin embargo, la familia también puede tener su origen en la convivencia entre dos personas que viven en pareja y que han formalizado esta relación ante la autoridad pública establecida (parejas de hecho registradas). O, incluso, en una convivencia libre, en cuyo caso dos personas viven juntas de manera estable y continua sin que esta relación se haya formalizado ante una autoridad (parejas de hecho no registradas)<sup>1</sup>. Pero el modelo de familia no solo se ha visto ampliado por el reconocimiento como tal de las parejas entre las que no media un vínculo matrimonial, sino también por la admisión, en algunos países, de la posibilidad de que tanto el matrimonio como las parejas estén formadas por personas del mismo sexo.

Pero más allá del matrimonio o las relaciones de pareja, los hijos también constituyen una pieza fundamental de la familia, por lo que también en materia de responsabilidad parental debe respetarse el principio de igualdad. La responsabilidad parental la constituyen los derechos y deberes que tienen las personas físicas, normalmente los padres, o jurídicas por ministerio de la ley o por resolución judicial,

---

<sup>1</sup> No existe una terminología homogénea para referirse a la convivencia entre dos personas que viven en pareja sin que entre ellas medie un vínculo matrimonial, por ello podemos encontrarnos también que para referirse a estas convivencias se utilicen las expresiones: uniones libres y uniones legales.



sobre la persona y el patrimonio del menor. En los supuestos en que los progenitores no conviven juntos, la responsabilidad parental recae, en especial, sobre las cuestiones relativas a la custodia y el régimen de visitas, entre otras. ([http://ec.europa.eu/civiljustice/parental\\_resp/parental\\_resp\\_spa\\_es.htm#1](http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_spa_es.htm#1). Fecha de consulta: 2.6.2015).

Ante esta situación, la regulación de la familia, el matrimonio y las parejas de hecho debe garantizar los mismos derechos y responsabilidades a mujeres y hombres durante el matrimonio o la convivencia, así como también tras la disolución del matrimonio o el cese de la convivencia, y garantizar que ambos progenitores tienen los mismos derechos y responsabilidades con respecto a los hijos. Por ello, los legisladores deben asegurarse de que el principio de igualdad consagrado por las Constituciones se codifica en leyes ordinarias de familia a fin de garantizar la protección contra la discriminación de las mujeres en este ámbito.

(ONU MUJERES <http://www.endvawnow.org/es/articles/764-derecho-de-familia-y-legislacion-sobre-el-matrimonio.html>. Fecha de consulta: 2.6.2015).

## 2. Régimen económico aplicable al matrimonio y a las uniones de pareja

### 2.1. Régimen económico. Conceptos básicos

El régimen económico matrimonial ("*matrimonial property rights*") comprende el conjunto de normas jurídicas relativas a las relaciones patrimoniales de los cónyuges derivadas del matrimonio y sus consecuencias frente a terceros. El régimen económico matrimonial responde, con carácter general, a las siguientes características: es necesario, dado que todo matrimonio debe contar con uno, ya sea uno de los que ofrece la ley u otro que libremente hayan establecido los cónyuges; debe ser público, en especial para permitir a los terceros conocer quién puede administrar los bienes y qué patrimonio deberá afrontar las obligaciones; y debe respetar el principio de igualdad, lo que implica que la mujer debe tener los mismos derechos y obligaciones que el hombre, en todas las cuestiones que atañen a la institución matrimonial (Villagrasa, 2011).

Si bien siempre ha existido regulación de los efectos patrimoniales del matrimonio, no ha sido hasta recientemente que algunos países han dictado normas que, de uno u otro modo, inciden sobre los efectos

económicos derivados de la convivencia de estas parejas de hecho -registradas y no registradas-, puesto que también entre ellas se genera un entramado de relaciones de contenido patrimonial que requiere de una cierta organización.

Los regímenes económicos se pueden clasificar, atendiendo a:

1. Su origen, entre regímenes de carácter convencional o pactado y de carácter legal. Mientras los primeros se constituyen en virtud de un acuerdo celebrado por los cónyuges (contratos matrimoniales) o convivientes; los segundos derivan de la ley, bien porque en determinadas circunstancias se impone necesariamente un régimen, o bien porque la norma legal funciona con carácter supletorio, de manera que entra a regir en el caso que los cónyuges no hayan establecido nada por vía convencional
2. Quién corresponde la administración, con independencia de la titularidad de las masas patrimoniales, conforme a lo cual podemos distinguir entre unidad de administración, cuando a ambos y de forma indistinta les corresponden las facultades de administración, y administraciones separadas e independientes.
3. Pero la clasificación más relevante para el objeto de nuestro estudio es la que se centra en cómo se distribuye la titularidad sobre los patrimonios. En esta línea, se produce una primera gran división entre los regímenes de comunidad y los de separación. Los primeros se caracterizan por conllevar la formación de un patrimonio común que puede estar integrado por todos los bienes que los cónyuges o convivientes aporten al matrimonio o a la pareja más los que adquieran vigente éste (comunidad universal), o, únicamente, por algunos de éstos (comunidad parcial). En este último caso, existen tres masas patrimoniales: una de cada cónyuge o conviviente y una común, la cual puede fijarse partiendo de criterios dispares.

En contraposición, los regímenes de separación se caracterizan porque no existe ningún patrimonio común, sino que por el contrario, no hay más patrimonios que los personales de cada uno de los cónyuges o convivientes, distintos e independientes entre sí, que cada cónyuge o conviviente conserva y sobre el que tiene plenas facultades de disposición y de gestión.

Por el momento no existe ninguna normativa que regule el régimen económico a nivel europeo y ello es así porque estamos ante una de las cuestiones más apegadas a la realidad sociocultural de cada país. Por esta razón, la iniciativa actual no busca la unificación de un régimen económico matrimonial europeo sino la aprobación de una legislación de carácter instrumental. A esto responde la Propuesta de Reglamento

del Consejo relativa a la competencia, a la ley aplicable, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales (COM (2011) (126) final), que culmina con una de las prioridades del Plan de Acción de Viena de 1998, entre las que figuraba la adopción de un instrumento europeo en materia de regímenes económico matrimoniales. A lo que debemos añadir el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo Europeo, el 11 de diciembre de 1999, en el que se declara que el reconocimiento mutuo debe extenderse a los regímenes matrimoniales y a las consecuencias patrimoniales de la separación de la pareja.

Por ello, ante la ausencia de una normativa europea al respecto y con el objetivo de conocer si el principio de igualdad es respetado en la economía familiar, a continuación presentaremos el panorama legislativo de algunos países que pueden ser representativos de diferentes culturas y tradiciones jurídicas. En concreto, indicaremos cuál es el régimen legal y cuál el supletorio, tanto en relación con el matrimonio como con las uniones de pareja. Y, en el caso de estas últimas, establecer, no solo si existe o no un régimen económico previsto para ellas, sino también determinar, en caso de que lo haya, si es el mismo que el aplicable al matrimonio o gozan de un régimen especial. Para la redacción de este epígrafe se tomará como ejemplo la regulación de algunos países de la UE<sup>2</sup>.

## 2.2. Régimen económico. Análisis de su regulación en algunas legislaciones nacionales europeas

### 2.2.1. Europa mediterránea. El caso español<sup>3</sup>

El régimen económico matrimonial es el que los cónyuges hayan pactado en capitulaciones matrimoniales (art. 1315 CC) (gananciales, separación de bienes o participación). A falta de pacto, el régimen económico matrimonial aplicable es el de la sociedad de gananciales, esto es, un régimen de comunidad parcial (art. 1316 CC). Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos mientras dicho régimen esté vigente, los cuales les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella (art. 1344 CC). Este sistema permite la existencia de bienes propios de los cónyuges y bienes comunes, así como la posibilidad

---

<sup>2</sup> Para la presentación del régimen económico de los países de la UE se han tomado como referencia los datos que constan en <http://www.coupleseurope.eu>. Página web elaborada por European Notarial Network, a cargo del Proyecto “El programa JLS 2007-2013 De la Comisión Europea, project JLS/2010/JCIV/10-1AG” (fecha de consulta 19-05-2015).

<sup>3</sup> España es un Estado plurilegislativo en materia civil y, en consecuencia, las legislaciones autonómicas regulan esta cuestión de manera distinta. Las referencias que se hacen en este trabajo se refieren a la legislación común: Código Civil Español de 1889.

de modificar el carácter de la propiedad mediante acuerdo entre los cónyuges en escritura pública. Los bienes propios de cada cónyuge están enumerados en el art. 1346 CC, entre ellos, los que él/ella aportó al matrimonio o los adquiridos durante el matrimonio a título gratuito.

Los bienes comunes (gananciales) se enumeran en el art. 1347 CC. Algunos de estos bienes son, por ejemplo, los obtenidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges o los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. Con respecto a la disposición de los bienes, cada cónyuge tiene la libre disposición de sus propios bienes y no tiene que responder por las deudas propias del otro (art. 1373 CC).

Los cónyuges tienen la posibilidad de acordar, mediante un contrato matrimonial, un régimen económico diferente al régimen legal de gananciales. Estos contratos conyugales pueden formalizarse antes o durante el matrimonio, y también pueden modificarse por los cónyuges en escritura pública ante notario ([art. 1315 CC](#)) y registrándose.

Como alternativa al régimen económico matrimonial legal de la sociedad de gananciales, la ley española permite la separación de bienes y la participación. En el régimen de separación de bienes (art. 1435-1444 CC) cada uno de los cónyuges conserva lo que él/ella aportó al matrimonio y se convierte en el único propietario de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio, si bien los que no puedan determinarse a quién pertenecen se presumirá que son de ambos cónyuges por mitad. Además, se regula el régimen de participación (art. 1411-1434 CC) en que cada uno de los cónyuges conserva lo que él/ella aportó al matrimonio y se convierte en único propietario de los bienes que haya adquirido durante el matrimonio, pero en el momento de disolución del régimen o finalización del matrimonio cada uno de los cónyuges tiene derecho a participar en las ganancias que su consorte haya obtenido mientras se aplique dicho régimen.

En ambos regímenes, los cónyuges no están, en principio, sujetos a ninguna limitación en la disposición de sus bienes y no tienen que responder por las deudas del otro, con la excepción de la vivienda familiar (art. 1320 CC), la cual es administrada por ambos con independencia de a quien pertenezca

En relación con las parejas, ya sean registradas o no, no hay una normativa específica sobre el régimen económico aplicable. Los miembros de la pareja son quienes pactan el régimen económico de su unión, pudiendo optar por reglas análogas a las previstas para el caso de matrimonio. En caso de no pactar nada y no haber previsión legal específica, se aplican las normas generales del derecho de obligaciones.

### 2.2.2. Países Nórdicos. El caso de Dinamarca

Tal como indica la Ley sobre los Efectos Jurídicos del Matrimonio de 8 de marzo de 1991, el régimen económico matrimonial legal en Dinamarca es el de comunidad de bienes. Todo lo que los cónyuges posean en el momento de contraer matrimonio o que adquieran más adelante se convierte en una parte de sus bienes comunes. Sin embargo, los cónyuges podrán decidir no aplicar el régimen legal sobre sus bienes y suscribir un acuerdo total o parcial de bienes independientes.

Para que el acuerdo de separación de bienes sea válido, debe hacerse por escrito, firmarse por ambos cónyuges y registrarse. Este acuerdo será válido con independencia de que se celebre antes o después de contraer matrimonio, sin olvidar que puede ser modificado en cualquier momento por un nuevo acuerdo.

A falta de un acuerdo que disponga otra cosa, se aplican las mismas disposiciones legales a una pareja de hecho, tanto homosexual como heterosexual, y a un matrimonio.

### 2.2.3. Centro Europa. El caso de Austria

De acuerdo con el *Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* de 1811 (ABGB), el régimen económico matrimonial legal es el de separación de bienes. En este régimen cada uno de los cónyuges conserva lo que él/ella aportó al matrimonio y se convierte en el único propietario de los bienes que adquirió durante el matrimonio ([§ 1237, ABGB](#)). Con respecto a la disposición de sus bienes, en principio, los cónyuges no están sujetos a ninguna limitación y no tienen que responder por las deudas del otro. Sin embargo, cabe la posibilidad de que los cónyuges adquieran bienes conjuntamente, que solo podrán usar y disponer de forma conjunta.

Los contratos conyugales que hagan referencia a la división de los ahorros y del hogar conyugal deberán firmarse ante notario. Estos contratos pueden formalizarse en cualquier momento antes o durante el matrimonio e, igualmente, pueden modificarse, siempre que se cumplan los requisitos formales.

Los cónyuges tienen la posibilidad de acordar, mediante un contrato matrimonial, un régimen económico matrimonial diferente al régimen legal de separación de bienes. Como alternativa al régimen económico legal, los cónyuges pueden optar por alguno de los regímenes económico matrimoniales que propone la ley austriaca, entre los que está la comunidad de bienes, o estipular uno propio.

Con respecto a la comunidad de bienes se distinguen dos formas: la comunidad de bienes INTER VIVOS no regulada legalmente y la comunidad de bienes en caso de fallecimiento. La primera de ellas puede

estructurarse como comunidad de bienes general o limitada, en este último caso solo respecto de los bienes enumerados en el contrato. Los cónyuges se convierten en copropietarios de los bienes comunes, siendo su participación (ideal) la establecida en el contrato, y en caso de duda, se presume a partes iguales. En el segundo tipo de comunidad, hasta el momento del fallecimiento cada cónyuge puede disponer libremente de sus bienes, pero cuando uno fallece los activos de los cónyuges se unen en una sola propiedad que, tras deducir las deudas, se divide por dos mitades.

La pareja registrada regulada en el *Eingetragene Partnerschaft-Gesetz* (EPG), donde se establece un régimen patrimonial que está reservado a parejas del mismo sexo. El régimen económico matrimonial legal también es de aplicación en las parejas de hecho registradas (§ 1217 para 2 ABGB).

Por el contrario, no hay provisiones específicas sobre el régimen económico para las parejas no registradas, y los tribunales rechazan una aplicación análoga de las normas del matrimonio, por lo que se aplican las provisiones generales del derecho de obligaciones.

#### 2.2.4. Europa del Este. El caso de Rumania

Según el Código Civil Rumano de 1865, en defecto de contrato matrimonial, el régimen económico matrimonial aplicable es el de régimen de comunidad universal de bienes, en el que todos los bienes adquiridos durante el régimen por cualquiera de los cónyuges forman parte de sus bienes comunes tal y como se recoge en el art. 339 del [Código Civil](#).

Al margen del régimen de comunidad universal de bienes, los cónyuges pueden elegir entre el régimen de comunidad de bienes convencional y el régimen de separación de bienes. En el régimen de comunidad de bienes convencional, los cónyuges pueden establecer sus propios criterios para determinar que bienes se consideran comunes, regular las modalidades de una futura división de los bienes comunes o disponer que sea necesario el consentimiento de ambos cónyuges para determinadas actuaciones de administración. Por el contrario, en caso de que elijan un régimen de separación de bienes, cada cónyuge retendrá los bienes que poseía con anterioridad al matrimonio y pasará a ser el único propietario de los bienes que adquiera de forma individual durante el matrimonio. No obstante, en los arts. 313 a 328 del [Código Civil se regulan una serie de directrices que deben respetarse con independencia del régimen económico](#) que elijan los cónyuges.

Como hemos avanzado, se puede suscribir un contrato matrimonial, ante notario, antes del matrimonio en cuyo caso dicho acuerdo surtirá efecto solo desde la fecha en que se celebre el matrimonio. El contrato

matrimonial también se puede suscribir durante el matrimonio. De ser así, el acuerdo surtirá efecto en la fecha de su firma real (art. 330 del [Código Civil](#)). E, igualmente, si el matrimonio se celebró al menos un año antes, los cónyuges pueden sustituir, cuando lo deseen, el régimen económico matrimonial existente con otro régimen o modificar el existente.

Por el contrario, las parejas de hecho (registradas o no) no están reconocidas ni reguladas por la legislación rumana.

#### 2.2.5. Inglaterra y Gales. Un supuesto de *common law*<sup>4</sup>

En Inglaterra y Gales no cuentan con un régimen económico matrimonial como tal. No existe comunidad de bienes, por lo que el matrimonio, en principio, no tiene efectos patrimoniales.

Dicho esto, los cónyuges pueden realizar un acuerdo justo para la distribución de su patrimonio en caso de ruptura, lo cual puede ser de gran importancia y es realmente un factor significativo que se ha de tener en cuenta por el tribunal al ejercer sus facultades discrecionales.

Ahora bien, con independencia de que exista o no un acuerdo matrimonial entre los cónyuges, los tribunales ostentan una amplia discrecionalidad para dictar órdenes conocidas como "liquidación de los efectos económicos", siempre que así lo soliciten los cónyuges

A pesar de que el acuerdo no tiene un carácter obligatorio, se recomienda encarecidamente que los cónyuges obtengan asesoramiento jurídico independiente, y que los bienes se inventarién totalmente, así como que cualquier pacto con trascendencia patrimonial quede recogido en el acuerdo.

También en estos países se puede otorgar y modificar un acuerdo matrimonial antes y durante el matrimonio (e incluso después de éste). Su efecto real depende de las circunstancias concretas de cada caso. Es bastante frecuente que los cónyuges suscriban acuerdos relativos a su patrimonio en el momento en que han decidido divorciarse (acuerdos de separación), los cuales pueden ser incorporados a órdenes judiciales (órdenes de consentimiento).

Por su parte, en Inglaterra y Gales no se establece un régimen específico para parejas que vivan juntas sin haber formalizado su relación (normalmente denominadas "cohabitantes") que, por ello, tendrán que basarse en el derecho general. Por lo que se refiere a las parejas del mismo sexo, estas pueden formalizar

---

<sup>4</sup> La legislación del Reino Unido tiene la particularidad que el derecho de Inglaterra y Gales se enmarca dentro del sistema del *common law*, mientras que Escocia se rige por el sistema del *civil law*. Puesto que la razón de incluir en este estudio el Reino Unido es, precisamente, que es uno de los pocos países europeos que se rigen por el sistema del *common law*.

su relación contrayendo una unión civil (Ley de unión civil de 2004). En su caso, los efectos legales son prácticamente idénticos a los del matrimonio, incluyendo la liquidación de los efectos económicos. Por ello, con razón, la unión civil es denominada "matrimonio en todo su sentido menos en el nombre".

### 3. Consecuencias en función del régimen económico aplicable

Una vez indicados los diferentes regímenes económicos aplicables a los matrimonios y, en algunos casos, también a las parejas, en algunos de los países de la UE, continuaremos nuestro análisis presentando cuáles son las consecuencias que se derivan de la ruptura del vínculo matrimonial o de la convivencia, tanto en caso de separación o divorcio, como en caso de fallecimiento en función del régimen económico aplicable en estos mismos países.

Prestaremos especial atención a aquellos efectos legales que la ruptura del matrimonio o el cese de la convivencia impliquen, cuando existan diferencias relevantes en función del sexo del contrayente o conviviente.

#### 3.1. Consecuencias del régimen económico aplicable en algunas legislaciones nacionales europeas<sup>5</sup>

##### 3.1.1. Europa mediterránea. El caso español

El divorcio o separación supone la liquidación del régimen de sociedad de gananciales (art. 1392 CC).

Para la liquidación de la sociedad de gananciales se realiza un inventario de los bienes, se pagan las deudas gananciales a los acreedores, se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y el resto se dividirá por mitad entre marido y mujer o sus herederos. Están excluidos de la división los bienes personales de los cónyuges, que corresponden directamente a su titular (art. 1346 CC).

El hogar familiar, aun en el caso de ser propio de uno de los cónyuges, puede ser adjudicado por el juez al otro cónyuge, bien cuando sus necesidades lo requieran, o bien cuando a él se atribuya la responsabilidad parental de los hijos comunes (art. 96 CC).

---

<sup>5</sup> Para la presentación del régimen económico de los países de la UE se han tomado como referencia los datos que constan en <http://www.coupleseurope.eu>. Página web elaborada por European Notarial Network, a cargo del Proyecto "El programa JLS 2007-2013 de la Comisión European Project JLS/2010/JCIV/10-1AG" y [http://ec.europa.eu/civiljustice/parental\\_resp/parental\\_resp\\_spa\\_es.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_spa_es.htm) (fecha de consulta 19-05-2015).



Si la separación o divorcio produce un desequilibrio económico a uno de los cónyuges, el desfavorecido tendrá derecho a una compensación, que puede consistir en una pensión temporal o indefinida o en una sola prestación. La compensación la pueden acordar de mutuo acuerdo marido y mujer en el convenio regulador de la ruptura aprobado por el juez o, si no hay acuerdo, la puede determinar el juez teniendo en cuenta determinadas circunstancias, entre otras, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo en las actividades profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio, las probabilidades de acceso a empleo, la edad, el estado de salud, etc. (art. 97 CC). La pensión puede ser modificada en caso de alteraciones sustanciales de las circunstancias, y se puede perder cuando el acreedor contrae nuevo matrimonio o convive maritalmente con otra persona.

En relación con los hijos, la ruptura no altera la titularidad de la patria potestad respecto de los hijos comunes, que corresponde igualmente a ambos progenitores. En cuanto a la custodia o responsabilidad parental, se puede determinar a propuesta de ambos padres en un convenio regulador, que debe ser aprobado judicialmente o bien por decisión judicial en los procedimientos contenciosos. Las modalidades en cuanto a la guarda y custodia de los menores podemos resumirlas en: 1) La atribución a uno solo de los progenitores, es la que se acuerda con más frecuencia<sup>6</sup>. 2) La atribución conjunta, alternando los periodos en que los menores están con uno y otro de los padres, se solicita y se acuerda sobre todo en los procedimientos de mutuo acuerdo. 3) Y, excepcionalmente por las circunstancias que concurren, se puede atribuir por resolución judicial a otra persona, a propuesta de los propios padres o directamente por el Juez.

Dicho esto, cuando el vínculo matrimonial o la convivencia se rompen por el fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes, las reglas que rigen la liquidación y el reparto de bienes serán las que ya se han comentado respecto de la separación y el divorcio. Además, el cónyuge viudo tendrá derecho al usufructo viudal, que puede variar en su cuantía según concurra o no con otros parientes. La cuota usufructuaria puede ser aumentada en el testamento.

---

<sup>6</sup> De acuerdo con los datos que [publicó el Instituto Nacional de Estadística \(INE\)](#) el 22.10.2014, en España en el 2013, de las rupturas de parejas con menores registradas, la custodia a uno solo de los progenitores se concedió en el 82,1% de los casos, en concreto, a la madre en un 76,2% y al padre en un 5,9%. Mientras que la custodia compartida se concedió en el 17,9% de los casos.

Al no existir, como ya se ha indicado anteriormente, una regulación conjunta para las parejas de hecho, la ruptura de la convivencia se regirá por la normativa autonómica aplicable, si la hay. Y, en su defecto, por los acuerdos que libremente hayan fijado las partes.

### 3.1.2. Países Nórdicos. El caso de Dinamarca

En caso de ruptura, los cónyuges podrán suscribir un acuerdo sobre la división de los bienes gananciales. En defecto de acuerdo, cada cónyuge recibirá, en principio, la mitad de los bienes gananciales existentes. La participación de cada cónyuge en los bienes se calculará por separado, teniendo en cuenta los bienes gananciales que pertenezcan a cada uno de ellos con deducción de sus deudas gananciales. En caso de que el cálculo muestre que la participación de uno de los cónyuges es superior a la del otro, se ajustará la diferencia.

El cónyuge tiene el derecho a excluir de los bienes gananciales aquéllos que sirvan para atender sus necesidades personales, siempre que su valor no sea desproporcionado teniendo en cuenta la situación económica de los cónyuges. También pueden excluirse de los bienes gananciales por parte del cónyuge con el que conviven los hijos aquellos bienes que se hayan adquirido para su uso por hijos menores de edad.

En algunas situaciones, un cónyuge puede tener derecho a una compensación especial. Este podría ser el caso en el que uno de ellos aportó la parte más significativa de los bienes gananciales y el reparto equitativo sería claramente irrazonable, ya que el matrimonio solo duró un corto período de tiempo; o cuando utilizó bienes gananciales para adquirir o mejorar sus bienes propios, entre otros.

Si un cónyuge tiene bienes propios, se podrá decidir que proporcione al otro una determinada cantidad que asegure que no sufrirá dificultades financieras indebidas como consecuencia de la ruptura, siempre que las circunstancias patrimoniales del matrimonio, su duración y demás circunstancias justifiquen tal medida.

### 3.1.3. Centro Europa. El caso de Austria

En ausencia de un contrato en el que se regulen los efectos económicos derivados de la ruptura, si se hubiera adquirido alguna propiedad de manera conjunta deberá dividirse equitativamente. Si bien, se tendrá en cuenta la calidad y el volumen de la contribución de cada cónyuge en la adquisición de la propiedad y el mantenimiento de los hijos. En tal caso, la división se hará mediante la asignación de bienes

y, solo si no fuera posible o de ello derivara un resultado injusto, el tribunal podrá ordenar un pago en metálico para compensar al cónyuge desfavorecido.

Con carácter general, están excluidos de la división los bienes que cada cónyuge aportó al matrimonio, los adquiridos a título gratuito y los bienes que son de uso personal de uno de los cónyuges o de su profesión. No obstante ser propiedad de uno de ellos, el hogar conyugal, los efectos domésticos y los ahorros conyugales se repartirán siempre que los cónyuges lo acuerden, el cónyuge no titular dependa de su uso continuo para garantizar sus necesidades vitales, o cuando un hijo común tenga la necesidad considerable de su uso continuado.

Respecto de estos mismos activos, los cónyuges pueden haber suscrito los denominados “contratos avanzados”, que establecen de antemano la división de la propiedad de estos bienes y ahorros conyugales en caso de divorcio. A pesar de que las partes hayan acordado un “contrato avanzado” el juez puede excluir sus efectos si ello conllevara una injusta desventaja para uno de los cónyuges o fuera irrazonable imponerle la división pactada.

Si se ha regulado mediante un contrato el reparto de los bienes, la culpa de los cónyuges con respecto al divorcio juega un papel decisivo. Si no hay diferencia en el grado de culpa, los cónyuges recibirán lo mismo que aportaron. En el caso de predominio de culpa de uno de los cónyuges, el otro puede elegir si el contrato conyugal debe anularse o si debe realizarse una división al 50%, como en caso de fallecimiento.

En relación con los hijos, la patria potestad sobre un hijo matrimonial corresponde automáticamente al padre y la madre desde el momento del nacimiento, mientras que la de los hijos extramatrimoniales se adjudica de forma automática a la madre, y al padre previa prueba.

En caso de ruptura, los padres separados disfrutan de amplias posibilidades para determinar la responsabilidad parental. La patria potestad sobre un hijo matrimonial sigue correspondiendo, en principio, a los dos progenitores. No obstante, si ambos quieren conservar la responsabilidad parental a todos los efectos como si continuaran casados, es preciso que remitan al tribunal, dentro de un plazo razonable, un acuerdo que éste deberá autorizar, siempre y cuando no atente contra los intereses del menor. También cabe la posibilidad de que los padres hayan determinado de antemano por mutuo acuerdo que, tras la ruptura del matrimonio, la responsabilidad parental corresponda solo a uno de ellos.

En caso de que las partes no alcancen un acuerdo en un plazo razonable o que lo convenido perjudique al niño, corresponde al tribunal decidir a cuál de los progenitores se confía la responsabilidad parental

exclusiva sobre el hijo. Asimismo, los padres podrán solicitar en todo momento una modificación del régimen de responsabilidad parental acordado, en función de los intereses del niño que, en todo caso, el tribunal validará.

Las parejas de hecho con un hijo en común disfrutan, en lo fundamental, de los mismos derechos en materia de patria potestad y responsabilidad parental que los matrimonios.

Por último, cuando la ruptura se produzca por el fallecimiento de uno de los cónyuges, el cónyuge viudo tiene derecho a una participación en el patrimonio y al legado de los efectos domésticos y el derecho a seguir viviendo en el hogar conyugal.

Si lo cónyuges han acordado régimen de comunidad de bienes *inter vivos*, las deudas existentes en el momento del fallecimiento se deducen primero de los bienes comunes y después, estos se dividen según la proporción acordada o, en caso de duda, por mitades.

Si han acordado un régimen de comunidad de bienes en caso de fallecimiento, es ahora cuando se unen todos los bienes en una sola propiedad que, tras deducir las deudas, se divide por dos mitades.

#### 3.1.4. Europa del Este. El caso de Rumania

A falta de acuerdo notarial entre los cónyuges sobre el reparto de los bienes y las deudas, el tribunal dividirá la comunidad de bienes legal o pactada de la siguiente forma: adjudicará a cada cónyuge sus bienes personales y distribuirá entre ellos los bienes comunes y las deudas. La parte a la que tiene derecho cada cónyuge se determinará en función de su contribución a la adquisición de los bienes comunes y el cumplimiento de las obligaciones familiares. El trabajo realizado por cualquiera de los cónyuges en el hogar y en la crianza de los hijos se considera como contribución a los gastos matrimoniales.

Si en el curso de la distribución del patrimonio común, los bienes asignados a un cónyuge superan la parte a la que habría tenido derecho considerando su contribución a la adquisición de dichos bienes, el otro cónyuge tiene derecho a recibir una compensación. Aparte de esto, el cónyuge que no tenga culpa con respecto al divorcio y que sufra un perjuicio debido a la conclusión del matrimonio puede reclamar una compensación al otro cónyuge. Además, si el divorcio provoca un deterioro significativo en las condiciones de vida del cónyuge no culpable, el matrimonio duró al menos 20 años y el divorcio tuvo su origen exclusivamente en la culpa del otro cónyuge, el cónyuge no culpable tiene derecho a una compensación aún mayor.

Con relación a los hijos matrimoniales, la responsabilidad parental la ejercen conjuntamente ambos progenitores, pero si los progenitores no están casados, se puede atribuir únicamente a la madre o, en caso que el padre haya reconocido al hijo, a ambos.

Cuando se produce el divorcio, el juez decide a cuál de los progenitores se le concede la custodia de los hijos menores. El progenitor divorciado ejerce los derechos parentales para con los hijos que tenga bajo su custodia. El progenitor divorciado que no tenga la custodia de los hijos tiene derecho a relacionarse personalmente con ellos y a supervisar su crianza, educación, escolarización y formación profesional. Esto mismo ocurre respecto de los hijos nacidos fuera del matrimonio y reconocidos por ambos progenitores.

Por último, en caso de que la ruptura se vea motivada por el fallecimiento de uno de los cónyuges, el superviviente heredará del cónyuge causante una parte del patrimonio que vendrá determinada en función de los familiares con los que concurra, o bien todo el patrimonio en aquellos casos en los que el causante no tenga otros herederos legales.

### 3.1.5. Inglaterra y Gales. Un supuesto de *common law*

Al tratarse de un sistema de *common law*, a los tribunales se les concede una amplia gama de facultades discrecionales para que dicten distintas órdenes para la regulación de los efectos patrimoniales de la ruptura (conocidas como "liquidación de los efectos económicos"), con el fin de lograr un resultado justo. Entre ellas, el tribunal puede decidir una reasignación de los bienes o, incluso, la venta de patrimonio, realización de pagos, órdenes relativas a pensiones, etc.

En el asunto de [\*Miller v. Miller y McFarlane v. McFarlane\*](#)<sup>7</sup> la Cámara de los Lores identificó tres "criterios" de justicia a tener en cuenta en el reparto patrimonial: las necesidades (tanto de las partes como de los hijos); la compensación (de desventajas generadas por la relación); y la distribución (de bienes). En cualquier caso, en esta liquidación de los efectos económicos, el tribunal debe dar prioridad al bienestar de los hijos de la familia. Dicho esto, en el mismo asunto, los principales argumentos parecían indicar que determinados conjuntos de bienes (como los prematrimoniales, los heredados y los recibidos por donación, o los "bienes no matrimoniales") debían tratarse de forma diferente que los "frutos del trabajo conjunto" y el hogar conyugal con respecto a la distribución tras el divorcio, a pesar de que también se sostenía que cuanto más hubiera durado la relación, menos importancia debería darse a tal distinción.

---

<sup>7</sup> [2006] UKHL 24, [151].

Por lo que se refiere a los hijos, si los progenitores están casados, ambos tienen la patria potestad. Si los progenitores no están casados, las madres son titulares de la patria potestad de sus hijos y los padres pueden adquirirla por acuerdo con la madre o por resolución judicial. Si los padres se divorcian, ambos conservan la responsabilidad parental salvo que un tribunal la revoque de forma explícita. Si los progenitores no casados se separan, tanto el padre como la madre conservarán la responsabilidad parental que tuvieran asignada.

Por último, si uno de los cónyuges muere, no existe una atribución reservada/obligatoria para el cónyuge superviviente. En cambio, en la sucesión intestada, el cónyuge heredará, si bien la parte que le corresponde dependerá de si concurre con otros parientes del causante.

Independientemente de si existe o no testamento, el cónyuge superviviente puede reclamar del patrimonio del causante una dotación económica (dotación para familiares) cuya cantidad determinará el tribunal de acuerdo con la Ley de herencia de 1975.

#### 4. Análisis de la situación de la mujer en función del régimen económico aplicable

Vistos los diferentes ejemplos de regímenes económico matrimoniales existentes en algunos países de la UE podemos concluir que existen dos grandes grupos a este respecto. Por un lado, estarían todos aquellos regímenes de comunidad de bienes, en los que se forma un patrimonio común que tendrá mayor o menor amplitud en función de los criterios legales o los acuerdos que determinarán qué bienes se consideran comunes y cuáles privativos. Por otro lado, en los regímenes de separación de bienes cada cónyuge no solo conserva el patrimonio anterior al matrimonio o a la formación de la pareja, sino que esta absoluta separación entre el patrimonio de cada uno de ellos se mantiene durante la convivencia, al ser cada uno de ellos propietario de todos los bienes que adquiera.

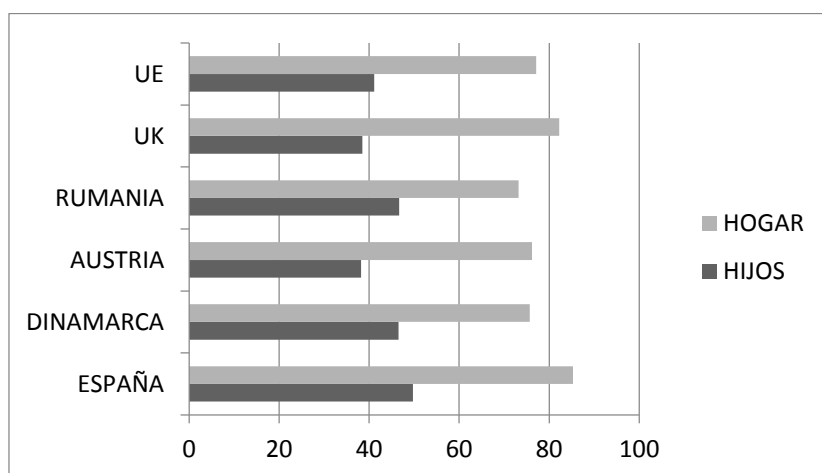
Si bien es cierto que, como hemos visto, estos dos grandes grupos permiten la posibilidad de pacto al respecto, es decir, es posible que los cónyuges o convivientes, tanto antes como durante el matrimonio, celebren pactos –que deberán cumplir algunos requisitos formales para su validez– en los cuales determinen reglas específicas entorno a la economía y respeto de la propiedad de los bienes de ambos cónyuges.

No podemos olvidar que, tal como hemos puesto de manifiesto al comentar, a modo de ejemplo, la regulación de algunos países de la UE, existen países cuyo régimen económico matrimonial no está prefijado legalmente. Se trata de aquellos países que pertenecen a sistemas jurídicos de *common law*, en los que es el pacto y, solo éste, el que regula cuál será el régimen económico aplicable al matrimonio o a la pareja, sin que exista ningún régimen supletorio. Ello conlleva que serán los tribunales quienes determinarán las relaciones patrimoniales del matrimonio o de la pareja en atención a las condiciones de caso concreto.

Ante este panorama legislativo, vamos a evaluar cuál es la situación de la mujer en función de cada uno de estos regímenes económicos o ante la ausencia de éstos. En primer lugar, debemos poner de manifiesto que en los regímenes de comunidad en principio y en la medida en que se comparte la propiedad de los bienes –de manera más o menos amplia en función de los criterios que la legislación en cuestión establezca o el pacto determine–, ambos cónyuges o convivientes compartirán y se beneficiarán de todas aquellas adquisiciones que se hayan producido durante el matrimonio o la convivencia, así como a ambos corresponderá su administración. Mientras que en los regímenes de separación de bienes cada uno adquiere sus bienes de forma individual lo que implica que también su administración se lleve a cabo únicamente por el cónyuge que los adquiere; no existiendo, por tanto, más bienes en común que aquellos que se compren *pro indiviso*.

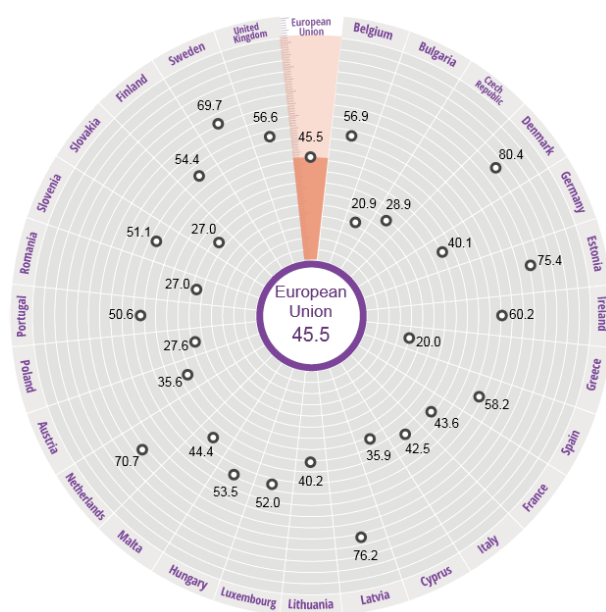
Antes de analizar las consecuencias concretas que se producen respecto de la mujer en cada uno de los dos grandes grupos de regímenes económico matrimoniales que hemos señalado, debemos advertir que la reflexión o análisis que se realizará a continuación debe partir de que, si bien la situación está cambiando, estamos lejos de que exista una plena igualdad entre el hombre y la mujer en la asunción de las cargas familiares. En la mayoría de casos, mientras que el hombre continúa, en un tanto por ciento muy elevado, trabajando fuera del hogar, es la mujer la que, a pesar de haberse incorporado al mercado laboral, asume el cuidado de la casa y de los hijos comunes. Por tanto, a pesar de tener una carrera profesional, la dedicación a la familia provoca que, en la gran mayoría de los casos, sea ella quien reduzca su jornada de trabajo fuera de casa o, incluso, renuncie a un trabajo remunerado fuera del hogar, con la consecuencia directa de una reducción, o incluso, una pérdida de ingresos económicos.

FIGURA 1. DEDICACIÓN DEL TIEMPO DE LA MUJER AL CUIDADO DE LOS HIJOS Y DEL HOGAR (%)



Fuente: EIGE, Gender Equality Index, 2010.

FIGURA 2. ÍNDICE DE IGUALDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN DE LA MUJER AL CUIDADO DE LOS HIJOS Y DEL HOGAR (%)



Fuente: EIGE, Gender Equality Index, 2010.

Hechas las precisiones anteriores, pasamos a determinar las consecuencias que se producen para la mujer en función del régimen económico aplicable:

- 1) Respecto de los regímenes económicos matrimoniales de comunidad de bienes, debemos precisar que las conclusiones a las que nos referimos tendrán mayor o menor incidencia en función de que las comunidades sean universales o parciales. Si, además, partimos de la base de que, tal como



hemos dicho, es la mujer quien asume las cargas familiares lo que repercute de forma directa en la realización de un trabajo fuera del hogar, la existencia de un régimen de comunidad tiene unas consecuencias evidentes favorables para la mujer.

- a) La primera de ellas es que los ingresos obtenidos por el trabajo fuera del hogar por uno solo de los cónyuges o convivientes durante el matrimonio o la convivencia pasan a ser de titularidad común, lo que a su vez implica que serán los dos cónyuges o convivientes a quienes corresponde su administración. Esto supone que si uno de ellos obtiene unos ingresos superiores, lo que suele ser debido a que dispone más tiempo para dedicarse a un trabajo fuera del hogar, estos ingresos se repartirán entre ambos.
- b) La segunda consecuencia, que a su vez deriva de la anterior, es que el compartir la titularidad de los ingresos obtenidos por el cónyuge o conviviente que trabaja fuera se puede entender como una “contraprestación” por el trabajo que el otro realiza en el hogar o en el cuidado de los hijos y que, seguramente, será la causa de que sus ingresos sean inferiores<sup>8</sup>. De hecho, si el cónyuge o conviviente puede obtener las ganancias que obtiene trabajando fuera se debe, en gran parte, a que el otro cónyuge se queda al cuidado de la casa y de los hijos. De manera que si este cónyuge o conviviente no compartieran los ingresos generados por su trabajo profesional, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto a costa del otro, que de forma gratuita desempeña el trabajo doméstico, que debería ser asumido por ambos. Es más, si se encargara a un tercero la realización de las tareas domésticas esto implicaría, indudablemente, un gasto, esto es la retribución de esta persona, que se pagaría con los ingresos que ambos obtendrían en el desempeño de sus trabajos respectivos.
- c) La tercera consecuencia es que si bien los ingresos, rentas o frutos obtenidos por el cónyuge que trabaja fuera del hogar se consideran comunes, por el contrario las deudas personales asumidas por uno de los cónyuges, y siempre que no sean para el pago de gastos comunes o relacionados con la administración de la casa o el cuidado de los hijos, serán asumidas solo por el patrimonio personal del cónyuge deudor. Este efecto, es decir el que se compartan los bienes pero no las deudas, se puede considerar una medida favorable en tanto que no perjudica al cónyuge o conviviente no deudor.

---

<sup>8</sup> En buena técnica jurídica, el trabajo doméstico no se cuantifica ni compensa a la extinción del régimen, esto es, no se paga pero sí se valora en la medida que los cónyuges comparten y reparten las ganancias obtenidas a lo largo de la convivencia, lo que significa que todo el trabajo –tanto el realizado fuera como dentro del hogar- tiene el mismo valor o la misma consideración.

- d) Una cuarta consecuencia, se produce en el momento de la disolución del matrimonio o el cese de la convivencia. En este caso, el hecho de que los bienes sean de titularidad conjunta hace que todo el patrimonio o el incremento patrimonial obtenido por cualquiera de los dos durante el matrimonio o la convivencia tengan que ser repartido entre ambos. Ciertamente es que los criterios de reparto no tienen por qué dar lugar a una división del patrimonio común a partes iguales, sino que habrá que evaluar los pactos y la situación concreta de cada matrimonio o convivencia pero, al menos, siempre estaremos ante un reparto de la masa de bienes común.

TABLA 1. EJEMPLO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR TRABAJO FUERA DEL HOGAR EN LOS RÉGIMENES DE COMUNIDAD DE BIENES

Ingresos del cónyuge que trabaja fuera del hogar	100	60	80
Ingresos del cónyuge dedicado al trabajo doméstico	0	40	20
Total ingresos	100	100	100
Reparto de las ganancias obtenidas entre ambos	50/50	50/50	50/50

- e) La quinta y última consecuencia tiene lugar cuando la ruptura se debe al fallecimiento de uno de los cónyuges o convivientes. En este supuesto, el hecho de que exista un régimen de comunidad de bienes también beneficiará, de nuevo, al cónyuge superviviente, si fue él quien se dedicó al cuidado del hogar y los hijos, porque el patrimonio común se liquida y reparte directamente entre éste y los herederos del fallecido. Además, el causante en su testamento puede haber realizado alguna disposición a favor del cónyuge o conviviente superviviente con cargo a la masa hereditaria. En caso de falta de testamento, las leyes sucesorias, en general, también suelen conceder ciertos derechos a favor del superviviente sobre los bienes hereditarios.

Como desventaja en los regímenes de comunidad de bienes podemos apuntar que cuando la diferencia entre los ingresos obtenidos por cada uno de los cónyuges es manifiestamente desproporcionada y muy superior al valor del trabajo realizado por el otro en el hogar y el cuidado de los hijos, el compartir estos ingresos perjudica a aquel cónyuge o conviviente que obtenga estos mayores beneficios, ya que lo obtenido por él se convierte de manera automática en patrimonio común. No obstante, hemos de advertir que como en esta circunstancia, normalmente, se suelen encontrar los hombres, se ha tenido en cuenta por las legislaciones

estableciendo algún tipo de limitación respecto de los bienes que forman parte del patrimonio común.

2) Respecto de los regímenes económicos matrimoniales de separación de bienes, que se caracteriza porque no se hacen comunes las ganancias mientras se generan, pertenecen en exclusiva a cada cónyuge los bienes que obtiene de forma individual que le aprovechan, en principio, de forma personal, e igualmente a la liquidación del régimen no se origina ningún crédito de participación.

a) Una primera consecuencia, teniendo en cuenta que, como ya hemos apuntado, suele ser la mujer la que se encarga del cuidado de los hijos y de las tareas domésticas, es que el hecho de que los bienes e ingresos que cada cónyuge o conviviente adquiera durante el matrimonio o la convivencia en pareja no se compartan sino que sean de exclusiva propiedad de quien los adquiere. Esto produce un claro desequilibrio económico en perjuicio del cónyuge que no trabaja fuera del hogar o lo hace a tiempo parcial, precisamente, para ocuparse de las tareas familiares, quien normalmente es la mujer.

b) Una segunda consecuencia es que la no comunicación patrimonial de los bienes de ambos cónyuges o convivientes existente mientras dura la convivencia, aun se acentúa más en el momento de la ruptura, ya que aquel que ha dedicado años de su vida al trabajo en el hogar y al cuidado de los hijos, no dispone de patrimonio propio en el momento de la separación o el divorcio. No obstante, y precisamente para mitigar el desequilibrio económico derivado de este régimen, en la mayoría de las legislaciones europeas (en particular, en aquellas en que el régimen de separación es el legal o el supletorio) y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 37/1978, de 27 de septiembre, del Consejo de Europa, referida a la igualdad de los consortes en derecho civil<sup>9</sup>, se ha legislado procurando una solución equitativa con la que paliar la injusta situación económica sufrida por la mujer. Así se ha establecido legalmente una norma liquidadora que brinda la posibilidad de que el cónyuge o conviviente perjudicado pueda obtener una compensación que repare, en parte y solo en determinadas circunstancias, la desigualdad económica producida. Esta compensación puede consistir en

---

<sup>9</sup> Tal como se recoge en su apartado 14, según el cual “to ensure that, where a matrimonial property regime of separation of goods arises by the operation of law, a spouse, on the termination of the marriage by a judicial decree of divorce or nullity, has a legal right to obtain a fair share in the property of his former spouse, or a fixed sum, for any financial inequalities which had arisen during the course of the marriage”. (Disponible en: <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=596422&SecMode=1&DocId=662346&Usage=2>)

que pueda acceder a una parte equitativa de los bienes del ex cónyuge o ex conviviente o bien en una indemnización (NASARRE AZNAR, 2011).

Con la misma función correctiva, este tipo de compensaciones deben preverse para el supuesto en que uno de los cónyuges haya trabajado para el otro sin obtener remuneración o por una remuneración insuficiente, puesto que también en este caso se produce un desequilibrio económico o un enriquecimiento injusto a favor de uno y en perjuicio del otro: uno de los cónyuges se ha enriquecido por el trabajo realizado por el otro, que se ha empobrecido. La actividad es el nexo causal, de modo que se dan los requisitos exigibles para la existencia de un enriquecimiento injusto, que se debe compensar (GETE-ALONSO Y CALERA y SOLÉ RESINA, 2014).

Gracias a estas medidas, el cónyuge que se ha dedicado al cuidado de la casa y de los hijos o que ha trabajado para el otro, resulta acreedor de una compensación económica que corre a cargo del cónyuge económicamente más fuerte. Solo de esta forma se consigue que entre las masas patrimoniales se produzca una comunicación de bienes que, en caso contrario, permanecerían inalteradas en el momento de la liquidación.

- c) Una tercera consecuencia se produce en el momento de fallecimiento del cónyuge que trabaja fuera del hogar. En tal caso, la situación de desequilibrio para el cónyuge o conviviente dedicado al trabajo doméstico se vuelve a poner de manifiesto por la falta de ingresos durante el matrimonio. Para paliar los efectos perniciosos que el régimen de separación ocasiona, especialmente en la posición económica de la mujer, es necesaria la aprobación de normas que le otorguen derechos sucesorios respecto del patrimonio de su cónyuge o conviviente en la sucesión intestada, con el fin de evitar que la precaria situación patrimonial de la viuda dependa de la mera voluntad del causante, manifestada a través de una atribución testamentaria a su favor.

Desde luego, el cónyuge beneficiario de todas las anteriores medidas comentadas también puede ser el hombre, pero la razón última de su previsión legal es la protección de la mujer y la consecución de la igualdad real, que era la que en aquellos tiempos quedaba, con más frecuencia y en mayor medida desprotegida.

Es obvio que los regímenes de separación de bienes, al margen de las medidas correctoras antes apuntadas, puede conllevar un claro beneficio para el cónyuge que ha trabajado fuera del hogar, puesto que no comparte sus ganancias ni sus incrementos patrimoniales con su

pareja, ni durante el matrimonio ni, tampoco, en caso de disolución, al provocar este régimen una separación económica absoluta entre ambos.

- 3) La posibilidad existente en varias legislaciones europeas de que los cónyuges o convivientes puedan acordar pactos en previsión de una ruptura, ya sea por disolución o por el fallecimiento de uno de ellos, constituye una medida que puede favorecer la consecución del objetivo igualitario. Sin olvidar que un pacto que pretenda un futuro reparto equitativo solo puede fundamentarse en una situación de igualdad entre ambos cónyuges o convivientes. Además, es muy importante para la validez de estos pactos, tal y como prevén la mayoría de las legislaciones europeas, el cumplimiento de unos requisitos formales que sirvan, precisamente, para asegurar que no se produce esta asimetría. Asimismo, estos pactos deben poder ser revisados y modificados por la autoridad judicial cuando las circunstancias que finalmente se produzcan demuestren la injusticia de su aplicación.
- 4) El dato de que todavía las custodias se atribuyen mayoritariamente a la madre en la ruptura del matrimonio o la convivencia, especialmente, cuando los hijos son de corta edad, ello lleva aparejado, en la práctica, una pérdida de oportunidades laborales que, sin embargo, no se ve compensada en el momento del cese de la convivencia lo que conlleva un perjuicio económico evidente.

## 5. Retos y limitaciones

Tal como estableció la LOI en su Preámbulo "(...) los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros, en palabras escritas por John Stuart. Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos".

Las leyes vigentes en los diversos sistemas jurídicos coexistentes en Europa parecen haber alcanzado la igualdad formal entre hombres y mujeres también en lo que se refiere a la creación, gestión y disposición patrimonial. Sin embargo, "el análisis desde una perspectiva de género del resultado de la aplicación de sus normativas pone en evidencia que todavía existen escollos legales que perjudican gravemente la situación patrimonial de la mujer a favor de la del hombre, e incluso (y lo que es aún más grave) que hay situaciones de este tipo de nueva generación, esto es que han sobrevenido tras las más modernas reformas legislativas y la más novedosa doctrina jurisprudencial. Especialmente afectan al patrimonio

personal de las mujeres casadas y/o con hijos, y en mayor medida después de que acontezca una crisis de convivencia de una relación matrimonial o no matrimonial” (GETE-ALONSO Y CALERA y SOLÉ RESINA, 2014, p. 857).

La igualdad efectiva entre hombres y mujeres sigue siendo un reto de la sociedad actual, puesto que, como hemos puesto de relieve anteriormente, es un hecho constatado que las mujeres siguen siendo el miembro de la pareja que en más ocasiones renuncia a un trabajo remunerado para poder dedicarse a las tareas domésticas. Es más, algunos estudios apuntan que si se aíslan los ingresos de las mujeres casadas o en pareja, de los ingresos del grupo familiar, resulta que la pobreza se duplicaría en estas mujeres (BRUNET, Ignasi; VALLS, Francesc; y BELZUNEGUI, Àngel, 2009).

En este sentido, consideramos que es urgente adoptar medidas de discriminación positiva, y llevar a cabo reformas legales, que adecúen la legislación vigente al derecho fundamental de la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

No importa cuánto hemos ganado cada uno, si yo he dedicado más tiempo que tú al trabajo para el hogar y a la crianza de los hijos, el matrimonio o la convivencia en pareja no tiene que suponer el enriquecimiento ni el empobrecimiento de ninguno de sus miembros

## 6. Referencias bibliográficas

- Brunet, I.; Valls, F.; y Belzunegui, À. (2009). Pobreza femenina: pobreza amagada? Una anàlisi del risc de pobreza per raó de gènere en diferents períodes del cicle vital. *Revista Internacional de Organizaciones*, 3, diciembre, 91-110.
- Couples in Europe. (s.f.). Recuperado el 8 de junio de 2015, de <http://www.coupleseurope.eu>.
- Derecho de familia y legislación sobre el matrimonio. (s.f.). Recuperado el 8 de junio de 2015, de <http://www.endvawnow.org/es/articles/764-derecho-de-familia-y-legislacion-sobre-el-matrimonio.html>.
- Diez Picazo, L. y Gullon, A. (2004). *Sistema de Derecho civil: Derecho de Familia. Derecho de sucesiones*. (9ª ed.) Madrid: Editorial Tecnos. Vol. 4
- Gete-Alonso y Calera, MªC., y Solé Resina, J. (2014). Mujer y patrimonio: (el largo peregrinaje del siglo de las luces a la actualidad). *Anuario de derecho civil*, 3(67), 765-894.
- Giménez Costa, A. Comentario al Capítulo II del Marco Común de Discriminación: la no discriminación. (2012). En A. Vaquer Aloy, E. Bosch Capdevila y Mª P. Sánchez González (Coord.), *Derecho Europeo de Contratos. Libros II y IV del Marco Común de Referencia* (137-181). Tomo I. Barcelona: Editorial Atelier.
- Nasarre Aznar, S. La compensación por razón de trabajo y la prestación compensatoria en el Libro Segundo del Código civil de Cataluña (2011). En R. Barrada, M. Garrido y S. Nasarre (Coord.). *El nuevo derecho de la persona y de la familia* (233-298). Barcelona: Editorial Bosch.
- Responsabilidad parental – España. (s.f.). Recuperado el 8 de junio de 2015, de [http://ec.europa.eu/civiljustice/parental\\_resp/parental\\_resp\\_spa\\_es.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_spa_es.htm).
- Villagrassa Alcaide, C. (2011). *Derecho de familia*. Barcelona: Editorial Bosch.

## 7. Recursos y materiales

AGUILERA RULL, Ariadna, Gènere i Dret de Família: una lectura de la compensació econòmica per raó de treball a partir del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, en Revista Catalana de Dret Privat, Vol. 15-1, junio, 2015.

ALASCIO CARRASCO, Laura, Gènere i Dret de Família: una lectura de la guarda compartida dels fills comuns a partir del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, en Revista Catalana de Dret Privat, Vol. 15-1, junio, 2015.

BERROCAL LANZAROT, A.I.: "Uniones o parejas de hecho. Los efectos patrimoniales constante y al cese o ruptura de la convivencia", en HERRERA CAMPOS, R. y BARRIENTOS RUIZ, M.A. (coords.): Derecho y familia en el siglo XXI: el derecho de familia ante los grandes retos del siglo XXI, Vol. 2, 2011.

BOELE-WOELKI, Katharina; MILES, Jo; SCHERPE, Jens M. (ed.). The future of Family Property in Europe, Intersentia, Cambridge, Antwerp y Portland, 2011.

GÓMEZ LIGÜERRE, Carlos, Gènere i Dret de Família: una lectura de la regulació del règim econòmic del matrimoni a partir del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya, en Revista Catalana de Dret Privat, Vol. 15-1, junio, 2015.

MESA MARRERO, C.: Las uniones de hecho: análisis de las relaciones económicas y sus efectos, Aranzadi, 2006 (3rd ed.).

POUS DE LA FLOR, M.P.: "Crisis de parejas: consecuencias patrimoniales por ruptura de las uniones de hecho", Revista crítica de derecho inmobiliario, núm. 712, Madrid, 2009.



